

trrimonio protestante en España y, después, sobre la situación del matrimonio anglicano en Gran Bretaña. En cuanto al matrimonio ortodoxo, se introduce explicando las principales diferencias con respecto al matrimonio canónico, por ejemplo, la mayor relevancia de la función del ministro sagrado, cuya intervención pasa a ser un elemento esencial del rito matrimonial. Dedicar el autor su atención después al matrimonio ortodoxo en España, y, para finalizar, ofrece la situación en Grecia, con el objetivo de mostrar un ejemplo de aplicación de una legislación civil al matrimonio ortodoxo.

El último capítulo es el de la Profª Moreno, que nos presenta una valoración crítica de la eficacia civil de los matrimonios de las confesiones con notorio arraigo. En este ámbito ha incidido especialmente la promulgación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. Entre las novedades de esta Ley, como se explica en el capítulo, se da la posibilidad de ejercer el derecho de contraer matrimonio conforme al propio rito, que reconocía la Ley Orgánica de Libertad Religiosa como contenido del derecho de Libertad Religiosa, a miembros de confesiones religiosas que no tuvieran suscritos pactos con el Esta-

do, pero que hubiesen alcanzado la declaración estatal de arraigo notorio.

Para finalizar podemos concluir con la consideración de que la presente obra colectiva se nos muestra como un buen instrumento para profundizar en un ámbito de estudio muy necesitado de reflexión. Ciertamente, los trabajos que incluye esta obra son –a pesar de versar todos ellos sobre tema matrimonial– muy heterogéneos entre sí, tanto por el concreto objeto material al que dedican su atención, como por su distinta autoría; no obstante, tienen una misma línea que los homologa, y es la pretensión de ofrecer al lector, y al estudioso en particular, una serie de conocimientos que traspasan el ámbito que suelen ofrecer otros trabajos de investigación jurídica. Bien sea por las contextualizaciones históricas –y también antropológicas y religiosas– de las materias que estudian, o bien sea por los concretos temas escogidos y las síntesis que llevan a cabo, al final se ha conseguido una aportación científica que puede ser muy útil para el objetivo pretendido, y por ello sólo me resta felicitar a los coordinadores y resto de autores del libro recensionado.

María del Mar MARTÍN GARCÍA

Kevin E. McKenna, *For the Defense. The Work of Nineteenth Century American Canonists in the Protection of Rights*, Collection Gratianus, Section Monographs, Wilson & Lafleur, Montréal 2014, 196 pp., ISBN 978-2-89689-070-5

El objeto del presente estudio es tratar de ofrecer una amplia panorámica del papel del abogado en la vida de la Iglesia

Católica, en especial a través del prisma de su sistema legal y de las aportaciones de varios canonistas estadounidenses que

han dedicado su vida a la defensa y protección de los derechos en la Iglesia. Se trata, como es sabido, de un tema que sigue muy actual, ya que los instrumentos de protección de los derechos fundamentales de los fieles aparecen hoy en día todavía muy deficientes. Y se puede lamentar que la Iglesia, que se presenta como *speculum iustitiae*, no lo sea tanto a la hora de la verdad.

Como ha sido anunciado, el estudio se centra en el caso de los Estados Unidos, en donde la Canon Law Society of America adoptó, en 1983, un *Código de Responsabilidad* que define las importantes relaciones de la abogacía con aquellos que están involucrados en el servicio al derecho y a la ley en la Iglesia, y destaca el importante papel que tiene el canonista de educar a los fieles cristianos en cuanto a sus derechos y al modo de conseguir valerse de ellos.

Más adelante se aprobó la «Carta de Dallas», en vistas a considerar la abogacía en un contexto ampliado de la defensa de los derechos de un grupo, una clase de individuos o un peculiar segmento de la población necesitado de acceder al derecho de defensa en la sociedad entendida en sentido amplio.

El autor, Kevin E. McKenna, es licenciado en Derecho canónico por la Pontificia Universidad Gregoriana y se doctoró en la Universidad Saint-Paul de Ottawa. Ejerce su ministerio sacerdotal en la diócesis de Rochester (Nueva York).

En el capítulo primero echa un vistazo a «la defensa de los derechos y los desafíos del abogado en el medioevo» (pp. 15-40). Se aprecia cómo, en esa época, los canonistas no se valían de todos los medios disponibles para aumentar los beneficios

proporcionados por los pleitos. Posteriormente, la necesidad de enfrentarse a los crímenes y abusos por parte de clérigos llevó a un sistema complejo de procedimientos nuevos, adoptados del derecho romano, y abrió un campo para los canonistas deseosos de proteger los derechos de aquellos que se veían acusados de dichos crímenes.

De ello se ocupa el autor en los siguientes capítulos, dedicados a las aportaciones en la materia de James McMaster y Eugene O'Callaghan (cap. II, pp. 41-80), Richard L. Burtzell (cap. III, pp. 81-122), Sebastian B. Smith (cap. IV, pp. 123-140) y William Mahoney (cap. V, pp. 141-160).

James McMaster (1820-1886) y Eugene O'Callaghan (1831-1901) fueron de los primeros en llamar la atención del público sobre la crisis del clero de la Iglesia católica en Estados Unidos, haciéndolo por medio de la prensa, en concreto del *Freeman's Journal* y de las cartas de Jus, en realidad de O'Callaghan. Denunciaban el estatuto del sacerdote estadounidense, que les parecía como carente del apropiado título de pastor y que era sometido a remoción, a menudo a gran coste personal, sin causa propia o procedimiento propio. El mismo O'Callaghan fue dimitido por su obispo y fue a Roma para defenderse ante la Sagrada Congregación para la Propagación de la Fe.

Richard L. Burtzell (1840-1912) redactó un *Canonical Status of Priests in the United States* y ayudó en todos los Estados Unidos a asegurar los derechos canónicos de los sacerdotes cuyo ministerio estaba contestado por la autoridad eclesiástica fuera de los cauces legales. Procuró informar a sus colegas de sus

derechos y de los medios disponibles para conseguir un juicio conforme a derecho. En esa época se celebraron tres concilios plenarios en Baltimore, en 1852, 1866 y 1884, el último de los cuales llegó a mejorar el estatuto de los sacerdotes. Se ha de tener también en cuenta la aportación del concilio provincial de St. Louis, de 1855, y de la Instrucción de 1878 de *Propaganda Fidei*, orientada a uniformar los procedimientos y las protecciones esenciales de los clérigos acusados de delitos.

Sebastian B. Smith se dio a conocer con sus *Notas acerca del segundo concilio plenario de Baltimore*, redactadas en 1874, en las que denunciaba la ausencia de proceso debido cuando se acusa de delito a algún clérigo, y el hecho de que clérigos y laicos acudieran a la jurisdicción civil para la solución de sus quejas. Smith era crítico con la manera en que los obispos imponían censuras a sus clérigos y delineaba los rasgos de los procedimientos canónicos en causas criminales.

William Mahoney (1829-1890) intentó promover un enfoque menos arbitrario de la disciplina del clero en los Estados Unidos. Algunos sacerdotes eran de difícil manejo, pues habían ido a los Estados Unidos, en cierto modo, para huir de los problemas que habían creado en su país de origen, pero trayendo esos problemas con ellos. Para algunos obispos, el recurso al derecho canónico les parecía algo pesado. Fue después de recibir continuas peticiones de sacerdotes que los Dicasterios romanos se dieron cuenta de la situación y de la necesidad de regularizarla, insistiendo en un procedimiento disciplinar más uniforme y canónico, incluyendo la instrucción de 1878.

El último capítulo se titula «El juicio por la vida o *La defensa de nuestro Pastor*» (pp. 161-184). Se trata de una parroquia de Saint Louis, Missouri, que defiende a su pastor sancionado por su obispo a causa de su incapacidad de llevar correctamente la gestión económica de la parroquia. *Our Pastor's Defense* es el título del libro que los parroquianos publicaron en esa ocasión, juzgando que su remoción era inapropiada.

Como conclusión se puede subrayar que los diez concilios provinciales y los tres concilios plenarios de Baltimore procuraron establecer normas para un correcto traslado o remoción de su oficio de los clérigos y sobre su sustento. Parece claro que las observaciones concretas puestas por escrito por canonistas, y la persistencia de quejas por parte de sacerdotes, considerando que no habían sido tratados con justicia a la hora de su remoción, influyeron en la normativa de la Santa Sede y en el mismo CIC de 1917, así como contribuyeron a que los procedimientos para esos casos en los Estados Unidos fueran más respetuosos con los derechos de los interesados.

Seis proposiciones destacan en estas intervenciones de la canonística norteamericana: 1º) La necesidad de establecer parroquias en Estados Unidos, y no simples misiones; 2º) de eliminar el «estatuto misionario» de la Iglesia en los Estados Unidos; 3º) nombrar pastores en los Estados Unidos, y no meros rectores de misiones; 4º) remover y transferir a los pastores según procedimientos no arbitrarios, sino en conformidad con lo que propone el derecho canónico; 5º) limitar el recurso a la suspensión *ex informata conscientia* por parte de los obispos;

y 6º) dejar más espacio para acudir a un abogado en los casos de remoción o traslado de clérigos.

Se puede decir que la dinámica iniciada en esa época «se prolonga en la Iglesia hoy en día en el campo de la pro-

tección de los derechos de todos los fieles de Cristo para asegurar que la salvación de las almas continúe siendo la ley suprema».

Dominique LE TOURNEAU

Tomás RINCÓN-PÉREZ, *El matrimonio cristiano: Sacramento de la Creación y de la Redención*, Eunsa, Pamplona 2008, 472 pp., ISBN 978-84-313-2519-0

Uno de los aspectos fundamentales del matrimonio canónico es el principio de inseparabilidad entre la institución natural y el sacramento, formulado de forma categórica por la Iglesia cuando afirma que *la alianza matrimonial fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados, de tal manera que entre ellos no puede haber contrato matrimonial que no sea por eso mismo sacramento* (cfr. c. 1055 §§ 1 y 2 CIC 1983). Aunque es una verdad que pertenece a la doctrina común y ha sido asumida por el Magisterio, periódicamente es objeto de discusión. Recientemente lo ha sido en relación a la relevancia de la fe para poder contraer válido matrimonio y el papa Francisco se ha pronunciado sobre ello en sus Discursos al Tribunal de la Rota Romana en 2015 y 2016. En el primero de ellos ha recordado que «el desconocimiento de los contenidos de la fe podría llevar a lo que el Código define *error que determina a la voluntad* (cfr. canon 1099)», añadiendo que «esta eventualidad ya no puede considerarse excepcional, como en el pasado». Y en el segundo, además de abundar en la misma idea, ha afirmado: «Es bueno recordar con claridad que la

calidad de la fe no es una condición esencial del consentimiento matrimonial (...). De hecho, el *habitus fidei* se infunde en el momento del bautismo y sigue teniendo un misterioso influjo en el alma, incluso cuando la fe no se haya desarrollado y psicológicamente parezca estar ausente. No es raro que los novios, empujados al verdadero matrimonio por el *instinctus naturae*, en el momento de la celebración, tengan un conocimiento limitado de la plenitud del plan de Dios, y sólo después, en la vida familiar, descubran todo lo que Dios, Creador y Redentor ha establecido para ellos».

En este contexto, la lectura del libro del profesor Rincón, cuya segunda edición me dispongo a comentar, no puede ser más actual. Se trata de una obra completísima en la que ofrece una recopilación de artículos, publicados la mayoría de ellos en *Ius Canonicum*, y que constituyen una prueba de su fecunda producción científica y su dedicación al tema. El propósito del volumen, como el autor explica, es recuperar el verdadero sentido de la sacramentalidad del matrimonio, que no es otra cosa que el matrimonio del principio o sacramento de la creación,